



Mujeres en la Unión Patriótica: trayectorias de lucha, genocidio y resistencia

Carlos Andrés Torres Mateus

* Magíster en Historia, Universidad Nacional. Trabajador social, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Docente, Corporación Universitaria Minuto de Dios. caratorresmat@unal.edu.co. Código ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3874-510X>



Resumen

El texto aborda la participación de mujeres en la Unión Patriótica (UP), un movimiento sociopolítico de izquierda en Colombia, a partir de un análisis realizado entre 1984 y 2022. Se analiza el surgimiento de la UP en un contexto de transición política y luchas sociales durante el ascenso del neoliberalismo. Se argumenta cómo las mujeres desempeñaron un papel crucial, liderando la política de alianzas y expansión del movimiento. Además, se abordan los ciclos genocidas vinculados a cambios geopolíticos y a intereses del bloque perpetrador del genocidio, que dejaron un saldo significativo de mujeres asesinadas y/o desaparecidas. Los impactos de estas prácticas genocidas afectaron no solo a las víctimas directas, sino también a sus redes más cercanas. Frente a la violencia, las mujeres de la UP resistieron, rompieron el silencio y buscaron la justicia, desafiando el olvido y liderando procesos de verdad en el país.

Palabras clave: mujeres, Unión Patriótica, genocidio, resistencia.





1. Introducción

Este artículo, arraigado a la Historia del Tiempo Presente (HTP), aborda la Unión Patriótica (UP) como un fenómeno en desarrollo, desafiando la dicotomía pasado-presente. La dialéctica entre historia y presente se fundamenta en la historización de la experiencia vivida, donde la memoria, anclada en esta experiencia, emerge como clave para comprender el presente histórico. La investigación utilizó fuentes primarias y secundarias, incluyendo entrevistas con mujeres de la UP, un balance historiográfico con la producción sobre el genocidio, y documentos de archivo y hemerográficos. Fundamentalmente, se utilizó el Semanario Voz y la Revista Semana, así como informes de la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Reiniciar, la Fundación Manuel Cepeda Vargas y el Grupo de Investigación Genocidio Político Contra la UP. La triangulación de fuentes involucró la comparación de datos cuantitativos, bases de datos de derechos humanos, resultados electorales y relatos para obtener una visión amplia de la participación de las mujeres en la UP, explorando proyectos colectivos, implicaciones de la destrucción de la UP en las mujeres y configuraciones de la memoria histórica.

La Unión Patriótica (UP) fue un movimiento sociopolítico de izquierda creado en mayo de 1985 en el marco de los Acuerdos de Cese al Fuego, Tregua y Paz suscritos en La Uribe, Meta. Representó el tránsito de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, a la vida política legal del país. Colombia se encontraba en tránsito al neoliberalismo determinado por la aceleración del proceso de urbanización, la expansión y fortalecimiento del latifundismo, la



economía y empresarios de la cocaína. En contradicción, las luchas sociales ascendían vinculadas a problemáticas de tierras, vivienda, género, educación, salud, entre otros factores determinantes, lo que impulsó el acelerado crecimiento de la UP que, a un año de lanzamiento, contaba con 190.269 personas carnetizadas en 990 municipios³³⁵.

2. UP como escenario de acción, participación y representación de las mujeres

Las mujeres construyeron en la UP un escenario de acción, participación y representación política desde el momento de su anuncio en 1984 hasta marzo de 1986. Se desarrollaron actos de lanzamiento, constitución de comités de mujeres, comandos y Juntas Patrióticas, manifestaciones, reuniones, foros, escuelas de formación femenina y la elección de candidaturas para las elecciones legislativas de 1986. En este periodo, se registraron por lo menos 300 acciones colectivas de lanzamiento y expansión de la UP lideradas o con participación mayoritaria de mujeres en el Urabá, Nordeste Antioqueño, Magdalena Medio, Ariari y en los departamentos de Cundinamarca, Santander, Valle del Cauca, Tolima. Otros registros importantes se ubican en la Costa Atlántica, la Amazonía, Cauca, Quindío y Bogotá, como se muestra en la figura I.

335 Óscar Dueñas Ruiz, *Reflexiones sobre la Unión Patriótica: datos hacia la verdad* (Bogotá: Cimaz, 2013), 23.

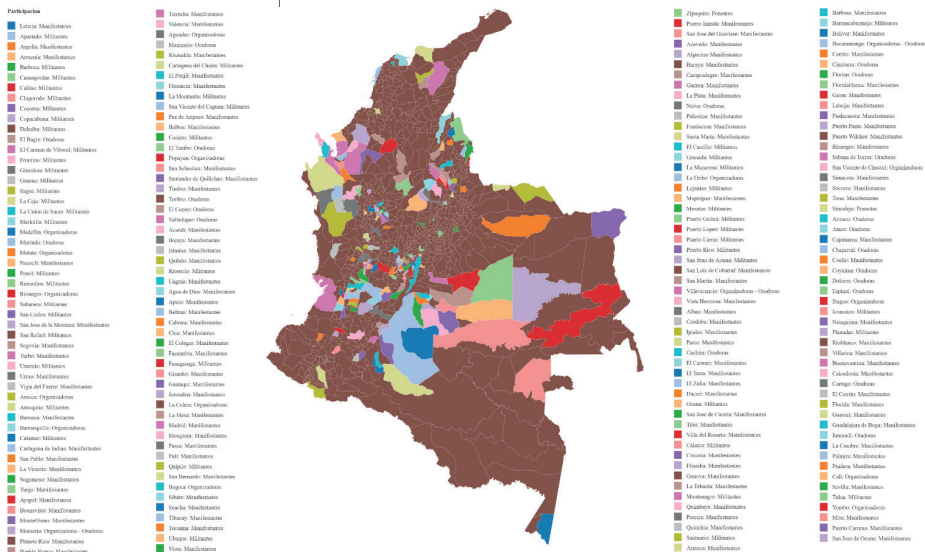


Figura 1: Mapa: participación de mujeres en la UP entre 1984 y marzo de 1986. Fuente: Archivos de prensa e historiografía; Elaboración propia.

Las acciones de organización desembocaron en el I Congreso Nacional de la UP, instalado el 14 de noviembre de 1985 con delegaciones de 3.249 Juntas Patrióticas, en donde se encontraban 611 delegadas (18,8%) provenientes de 22 departamentos del país que lograron trasladar sus reivindicaciones a la plataforma política de la UP:

Por el derecho al trabajo asalariado sin discriminación salarial ni sexual y con garantías sociales para ejercerlo. Por el cumplimiento de las disposiciones legales que establecen la igualdad de la mujer y el hombre en los diferentes terrenos. Reglamentar la ley 51 de 1981 contra toda forma de discriminación de la mujer. Por la eliminación de la subordinación de la mujer en su relación con el hombre. Por guarderías, lavanderías y restaurantes populares creados por el Estado y la empresa privada. Condiciones democráticas para la procreación de la familia, puesta en marcha por el Estado de métodos de planeación familiar efectivos y gratuitos, sin



que ello indique injerencia estatal. Abolición del delito de aborto³³⁶.

A pesar de la jerarquía de valores androcéntricos, la mala distribución del sistema económico y la disparidad política, las mujeres en la UP conquistaron entre 1986 y 2022 87 escenarios de representación: 49 curules en el concejo, 27 alcaldías, 8 asambleas departamentales, 3 Representantes a la Cámara y la participación de Aída Avella en la Asamblea Nacional Constituyente. La gestión de las representantes viabilizó, entre otras, el distrito de obras públicas de Arauca, Vichada y Guaviare, en cabeza de Elsa Rojas; por su parte, Diana Cardona, alcaldesa de Apartadó, adelantó el relleno sanitario, la construcción de redes de alcantarillado e iluminación, así como el proyecto regional «Urabá es Colombia en el siglo XXI». También ejercieron oposición a los gobiernos de turno, impulsaron movilizaciones por la paz y la democracia, como la marcha silenciosa del 7 de noviembre de 1986, liderada por la comisión femenina de la UP en el Valle del Cauca. En general, transgredieron el modelo de participación en lo político y el sistema de partidos de la época, fueron la respuesta más cercana a las necesidades de las comunidades y ampliaron las redes de simpatía y militancia. Sin embargo, los territorios donde se encontraban estuvieron atravesados por la expulsión violenta, masacres, desapariciones y asesinatos selectivos de las comunidades que las eligieron o de ellas mismas.

3. Ciclos genocidas contra las mujeres en la UP

El proceso de consolidación regional de la UP y la posibilidad de poder que representaba movilizaron sectores del bloque de poder que buscaban su destrucción. Entre 1984 y 2016, la Jurisdicción

336 Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Reiniciar, *La paz frustrada en tierra firme: Tolima* (Bogotá: Reiniciar, Embajada de Suecia, 2013), 77-78.



337 Jurisdicción Especial para la Paz, Auto N° 075 de 2022, 7 de abril de 2022.

Especial para la Paz estableció que por lo menos 5.733 personas fueron asesinadas o desaparecidas³³⁷ y la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Reiniciar reportó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 6.201 casos de víctimas no fatales³³⁸.

Las prácticas sociales genocidas contra las mujeres en la UP se desarrollaron en diferentes ciclos que respondieron a una coyuntura geopolítica que facilitó la constitución del bloque perpetrador como producto de una «multiplicidad de procesos transfronterizos [que] ha reunido a diversos actores colectivos violentos (tanto legales como ilegales), agencias estatales y particulares»³³⁹ organizado para destruir a la UP y su poder regional como garantía de reproducción de lo acumulado y profundización del odio contrainsurgente. El escenario previo se ubica entre 1980 y 1986, caracterizado por la demonización de las guerrillas y la asignación de una identidad armada-ilegal al movimiento que se valía de la «combinación de todas las formas de lucha» para justificar la destrucción. Los asesinatos contra las mujeres iniciaron en 1984 contra militantes comunistas que defendían los acuerdos, mujeres que habían dejado las armas y contra quienes organizaban los actos de expansión de la UP. En esta época fueron asesinadas 31 mujeres, principalmente en el Huila.

Durante el primer ciclo genocida (1987 y 1991), la expansión del paramilitarismo, auspiciado por las rentas de la economía de la cocaína y sus relaciones con las fuerzas militares, impactaron a las mujeres en la UP. Solo en el año 1988 se perpetraron 9 masacres en territorios de influencia del movimiento; ejemplo de esto es el Plan Esmeralda

338 Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), *Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002* (Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018), 108.

339 Andrei Gómez, *Genocidio, geopolítica y redes transnacionales. Una contextualización de la destrucción de la Unión Patriótica en Colombia*, trad. Mateo Reyes (Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Ciencia Política, Ediciones Uniandes, 2018), 17.



con objeto de destruir al movimiento en el Meta y Caquetá o la masacre del 11 de noviembre de 1988 en Segovia, que dejó un saldo de 11 mujeres simpatizantes asesinadas en el municipio gobernado por la dirigente Rita Ivonne Tobón. El crimen buscó contener los procesos reivindicativos del municipio con ánimo de segregar y aleccionar a la población a través del terror y el aniquilamiento. El registro de asesinatos y desapariciones en este periodo es de 133 mujeres en Urabá, Nordeste Antioqueño, Ariari, Magdalena Medio, Bogotá y Medellín.

El segundo ciclo (1992 y 2002) estuvo determinado por la apertura al proyecto neoliberal, el derrumbe eurosoviético, el escalamiento de la asistencia militar de los Estados Unidos bajo la figura de «lucha antinarcóticos» y la federación de las estructuras paramilitares en las Autodefensas Unidas de Colombia, que dejó un saldo de 187 mujeres en la UP asesinadas o desaparecidas, principalmente en el Urabá y el Ariari.

El último ciclo (2002-2010), marcado por el ascenso de Álvaro Uribe a la presidencia y su política de seguridad democrática, ubicó la salida militar como única alternativa al conflicto. En este periodo se unificó el bloque de poder y potenció la privatización de la seguridad, atizando la persecución contra organizaciones de Derechos Humanos y sociales bajo el dispositivo retórico del «terrorismo». La UP perdió su personería jurídica y se intensificó la violencia contra quienes sobrevivieron, dejando un saldo de 20 mujeres asesinadas entre 2002 y 2005.

Los ciclos genocidas coinciden con la influencia regional; entre 1984 y 2005 hubo 371 mujeres



a quienes se cercenó su vida en 22 departamentos y 99 municipios, mayoritariamente en el Urabá, Magdalena Medio y Ariari, seguidos por Bogotá, Nordeste Antioqueño, Huila, Piedemonte Llanero y Sur del Tolima, como se muestra en la Figura II.

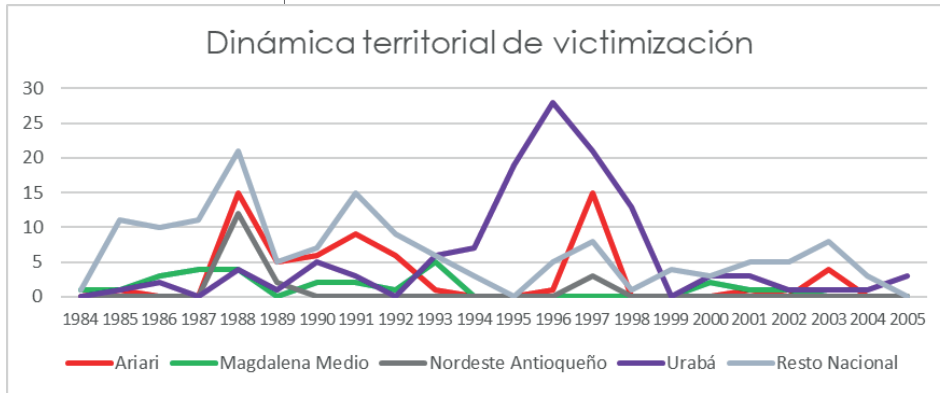


Figura II. Dinámica regional de victimización

Fuente: Archivos de prensa, Corporación Reiniciar y proyecto Vidas Silenciadas: Elaboración propia

4. Impactos de las prácticas genocidas

Los ciclos genocidas implicaron «la ruptura de un proceso político y social que empezaba a ser asumido y desarrollado por mujeres en gran parte de los territorios»³⁴⁰. Teniendo en cuenta el subregistro en todos los casos debido a la impunidad, la desaparición forzada y los silencios y de acuerdo con la disponibilidad de información (334 casos), el aniquilamiento se centró en las militantes, con un 59% correspondiente a 198 casos; seguido por dirigentes con un 18% (60 casos); simpatizantes 16%, y finalmente un 7% familiares. Las prácticas genocidas cumplían fines específicos con relación al género, por ende, tuvieron impactos materiales que se extendieron al campo ideológico y cultural.

Se hallaron 10 casos de mujeres asesinadas o desaparecidas sometidas a prácticas como la muti-

340 CNMH, *Todo pasó frente a nuestros ojos*. (Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018), 357.



lación e incineración genital o la violencia sexual que constituyeron un mecanismo de control sobre el territorio y el cuerpo como anexo a ese territorio. La intención fue erradicar la potencia alternativa, la militancia política, al tiempo que fortalecía la visión androcéntrica y la dominación de los perpetradores. También se identificaron nueve casos de mujeres embarazadas víctimas de masacres, detención, asesinato selectivo y tortura; se presume que esta práctica busca impedir la «contaminación parental»³⁴¹, esto es, el nacimiento y reproducción de identidades políticas relacionadas con la UP.

También hubo impactos contra las redes familiares y de simpatías, hubo familias militantes que tuvieron hasta cinco mujeres masacradas³⁴². Esto fue un mecanismo recurrente, algunas fueron torturadas frente a sus familiares, amigos o parejas, su militancia política figuraba una amenaza al bloque de poder, debido a que las mujeres sobrepasaban el ámbito de la organización del cuidado. Entre los impactos familiares, se evidenció la alteración de la estructura y dinámica de reproducción objetiva y subjetiva de sus miembros, algunas mujeres tenían el papel de proveedoras y su ausencia impactó el sustento económico, al tiempo que reconfiguró el cuidado y la crianza.

Las familias fueron estigmatizadas bajo la retórica de «auxiliadoras de la guerrilla», que conllevó a la segregación social y, en muchos casos, al desplazamiento forzado y el exilio, también movilizadas por otros hechos victimizantes. Esto implicó la desarticulación familiar por la distancia física y emocional de sus integrantes, así como el desarraigo territorial, pues debían construir nuevas formas de relacionamiento y subsistencia. Tras

341 Véase. Mary Jane Treacy, «Double Binds: Latin American Women's Prison Memories», *Hypatia* 11, n° 4 (1996): 130–145, www.jstor.org/stable/3810397.

342 Uno de los hitos genocidas se encuentra en el caso de Rosalba Camacho, concejal de Prado, Tolima en 1980, municipio en donde fue víctima de desplazamiento forzado y constantes amenazas por parte del comandante del Ejército, que la amedrentaba diciendo que «la tenía en la mira porque auxiliaba a la guerrilla enviándole remesa y que todo eso se lo iba a hacer pagar a ella y su familia porque él conocía muy bien la región». El 22 de febrero de 1991, en Prado se llevó a cabo la «Masacre de Montoso» o «Masacre de la familia Vásquez Camacho»: hombres armados ingresaron a la vivienda y asesinaron a cinco mujeres y un hombre, Rosalba Camacho (madre), Martín Vásquez (padre) Elizabeth Vásquez (hija), Josefina Vásquez (hija), Dally Vásquez (hija) y Luz Adriana Hernández (nieta), las dos últimas menores de edad. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *Informe n° 5/97 – Caso 11.227* (Organización de los Estados Americanos, 1997), 93.



la victimización, muchas mujeres se adhirieron a trabajos precarizados, aumentando la feminización de la pobreza.

Conviene razonar sobre el impacto relacionado con el silencio, derivado de la coacción violenta a la que se vieron sometidas las víctimas en procura de salvaguardar su existencia y evitar revivir hechos victimizantes. Las prácticas de sujeción, aleccionamiento y silenciamiento contra las mujeres en la UP buscaron dejar claro qué implicaba participar o simpatizar con movimientos que cuestionaban el orden establecido. Muchas mujeres se alejaron de su identidad política y utilizaron el silencio como forma de resistencia y cuidado para mantenerse con vida a sí mismas y a sus familias. Con el silencio, el bloque perpetrador obtiene la sujeción, la privatización del duelo y el sufrimiento para garantizar el consenso social orientado por quienes detentan el poder. Esto conlleva al aislamiento, imposibilita la acción política y las redes de sororidad y solidaridad quedan coartadas, frustrando la capacidad de poder: el fin subyacente del bloque perpetrador. A pesar de ello, las mujeres rompieron el silencio y la invisibilidad, se volcaron en la recuperación de su lugar en la narrativa histórica, resistiendo al olvido, el aislamiento y liderando los procesos de justicia y verdad, que exceden la capacidad de extensión de este artículo³⁴³.

Conclusión

Las mujeres de la UP encarnan la memoria y acción del movimiento sociopolítico. A pesar de los obstáculos del androcentrismo y las prácticas genocidas que buscaron la destrucción del movimiento, las mujeres lograron ampliar la influencia

343 Para ampliar sobre las resistencias, véase: Andrés Torres Mateus. (2020). Militancia, destrucción y resistencias de las mujeres en la Unión Patriótica. *Revista Ciencias y Humanidades*, 11(11), 345-374.



de la UP desde las regiones. Esta consolidación regional la posicionó como la tercera fuerza política en Colombia, lo cual generó amenazas para el bloque en el poder. El proceso de destrucción del movimiento no solo tuvo consecuencias físicas, sino que también se extendió al ámbito ideológico y cultural, generando silencio, parálisis y aislamiento. Las mujeres demostraron resistencia, desafiando la parálisis y participando en acciones colectivas y luchas cotidianas por verdad, justicia y paz. El artículo plantea la necesidad de superar las concepciones liberales del genocidio e insta a contemplar la red y dirección de actores del bloque en el poder implicados en las prácticas genocidas. Se destaca, también, la urgencia de abordar la coyuntura política genocida en Colombia, con el asesinato de liderazgos sociales y defensores de derechos humanos desde la firma del Acuerdo Final de Paz.

Bibliografía

Fuentes primarias

Documentos Legales y Judiciales

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. *Informe n° 5/97 – Caso 11.227*. Washington, D.C.: Organización de los Estados Americanos, 1997.

Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). *Auto N°. 075 de 2022*. Bogotá, D.C., 7 de abril de 2022. https://jurinfo.jep.gov.co/normograma/compilacion/docs/pdf/Auto_SRVR-075_07-abril-2022.pdf

Libros y Artículos Académicos

Centro Nacional de Memoria Histórica. *Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002*. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018.

Centro Nacional de Memoria Histórica. *Silenciar la democracia. Las masacres de Remedios y Segovia, 1982 – 1997*. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014.

Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Reiniciar. *La paz frustrada en tierra firme: Tolima*. Bogotá: Reiniciar, Embajada de Suecia, 2013.

Dueñas Ruiz, Oscar José, ed. *Reflexiones sobre la Unión Patriótica: datos hacia la verdad*. Bogotá: Cimaz Industria de Impresos, 2013.

Franco, Vilma. *Orden contrainsurgente y dominación*. Medellín: Instituto Popular de Capacitación, 2009.

Gómez, Andrei. *Genocidio, geopolítica y redes transnacionales. Una contextualización de la destrucción de la Unión Patriótica en Colombia*. Trad. Mateo Reyes. Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Ciencia Política, Ediciones Uniandes, 2018.

Treacy, Mary. «Double Binds: Latin American Women's Prison Memories.» *Hypatia* 11, no. 1 (1996): 130–145. www.jstor.org/stable/3810397.

Torres Mateus, Andrés. «Militancia, destrucción y resistencias de las mujeres en la Unión Patriótica.» *Revista Ciencias y Humanidades* 11, no. 11 (2020): 345–374. <https://orcid.org/0000-0002-3874-510X>.